

## Crimen organizado, horror político y coraje cívico

Felipe Curcó: *La guerra perdida. Dos ensayos críticos sobre la política de combate al crimen organizado*, 2006-2010, Coyoacán, México D.F., 2010, 110 pp.

Al viajero que, proveniente de Europa, llega a México y pasa unas semanas en este enorme y hermoso país le sorprenden, entre otras muchas cosas, las muchedumbres –23 millones de personas sólo en la capital–, el alto porcentaje de gente joven –más de 28 millones de personas entre los 15 y los 29 años, un 26,2% de la población– y la extraordinaria amplitud de la economía informal –la cual, si bien no cuenta con estadísticas oficiales, se estima que representa el 13,5% del PIB y debe de ocupar a un 28,1% de la población activa, aunque si en este apartado se añaden las personas que se dedican al trabajo doméstico remunerado, el porcentaje se eleva al 32,5%.<sup>1</sup> Es probable que este viajero llegue prevenido, inquieto, quizás temeroso de toparse con algún episodio o alguna de las secuelas de la violencia en la que las acciones del ejército, la policía y los grupos criminales organizados tienen sumido al país. Desde hace unos cinco años, cuando Felipe Calderón, el recién designado presidente de la república, después de unas elecciones poco claras, ordenó el despliegue del ejército en las calles para luchar contra el crimen organizado, la violencia se ha recrudecido hasta extremos insoportables, con matanzas indiscriminadas de estudiantes, como la de Ciudad Juárez en octubre de 2010, o masacres de inmigrantes indocumentados, como la de Tamaulipas en agosto de 2010. Como sintetiza Curcó, en la apertura de su libro, «México es el país donde la barbarie se ha vuelto parte del paisaje» (7). Desgraciadamente, por lo que ya se ha dicho, no se trata de una hipérbole. Por ello, porque ha leído los periódicos y visto los noticiarios con frecuencia, el viajero llegado de Europa ya no se sorprende al enterarse de que en los últimos cinco años ha habido alrededor de 35000 muertes violentas en conexión más o menos directa con la mal llamada “guerra contra el narcotráfico”, de que el 68% de los municipios del país están penetrados en grados diversos por la delincuencia organizada –y que en algunos casos, como en Durango o Ciudad Juárez, no es el Estado, sino los grupos criminales los que ostentan la autoridad *de facto*–, o de que el 40% del PIB mexicano está vinculado a actividades delictivas, lo cual sitúa al país en una pendiente peligrosa que conduce a la tesitura en la que se encuentran Estados fallidos como Afganistán o Pakistán.

Para que el lector español, hoy quizás asombrado por el inopinado movimiento de los llamados *indignados*, se haga una idea del nivel real de captura del Estado y del quebrantamiento de la ciudadanía en México y, por tanto, de las dimensiones que puede alcanzar la indignación de la gente en este contexto, bastaría con que leyera el *Diario de Juárez* del 19 de septiembre de 2010 que, en su editorial, hacía un llamamiento a los dirigentes de los grupos criminales de la ciudad para pedirles orientación acerca de lo que debían escribir sus periodistas para evitar ser asesina-

---

<sup>1</sup> *El periódico de México*, en su edición del 1 de noviembre de 2009, daba cuenta de esta última estimación.

dos<sup>2</sup> o la “Carta abierta a los políticos y los criminales”, firmada por el poeta Javier Sicilia, en la cual el dolor del padre truncado y la indignación del ciudadano definitivamente consciente de que el Estado no sólo no le protege, sino que lo expone, se sumaban en un rugido de hartazgo dirigido a los que han perdido toda esperanza<sup>3</sup>. En las circunstancias persistentemente dramáticas que soportan los mexicanos, sólo la indignación —una indignación que no por justa deja de ser desgarradoramente dolorosa— parece ser la única vía para conservar la dignidad y no quedar reducido a aquello que Giorgio Agamben señaló en su día y Curcó sentidamente recuerda: nuda vida, «mero cuerpo, expresión del hecho autómatas de vivir que la lógica impersonal de un poder coludido con el crimen transforma en eso que también el teórico italiano denomina *homo sacer*: una vida a quien cualquiera puede dar muerte pero a la que leyes y ritos —en acto de mera retórica circunstancial— definen teatralmente como insacristificable» (49).

El libro de Curcó, breve y afilado como una navaja, disecciona a través del primero de sus dos ensayos —*La muerte fácil (o el hipócrita combate al crimen organizado en México)*— la política de lucha contra el crimen organizado emprendida por el Estado mexicano, examinando sus consecuencias jurídicas, sociales y políticas, y valorando críticamente sus escasos y contraproducentes resultados desde 2006 a 2010, mientras dedica el segundo —*El combate al crimen en México: la otra alternativa. (Notas sobre “La paradoja del castigo esperado”, de E. Buscaglia)*— a exponer, apoyándose básicamente en las investigaciones de éste y, en particular, en su trabajo acerca de la “paradoja del castigo esperado”, cómo es posible articular una estrategia distinta y efectiva de lucha contra el crimen organizado que descansa sobre la base de acuerdos internacionales en la materia consensuados por expertos ampliamente reconocidos. En franca coincidencia con otros análisis recientes como, por ejemplo, el de Rubén Aguilar y Jorge Castañeda<sup>4</sup> o el de Nancy Flores<sup>5</sup>, y con lo que hoy ya aparece como un clamor popular<sup>6</sup>, el veredicto es inequívoco: la estrategia impulsada por Felipe Calderón se implementó a la brava, como un gesto de autoridad cuyo objetivo era contrarrestar y hacer olvidar las acusaciones de fraude electoral que pesaban sobre el flamante presidente, sin apoyarse en un diagnóstico adecuado de la estructura y *modus operandi* de los grupos criminales organizados —sin tener en cuenta, por ejemplo, que el delito de narcotráfico representa sólo entre el 45 y el 48% de los ingresos de tales grupos, mientras que el resto deriva de un funesto ramillete de otro tipo de delitos, entre los cuales los más rentables son el secuestro, el chantaje y la extorsión—, concentrándose en el dispositivo militar y descuidando las bases sociales, económicas y políticas en las cuales germina la prosperidad de estos grupos y

---

<sup>2</sup> El texto completo, que es estremecedor, puede leerse a través de la página *web* del noticiero *El Universal.mx*. Véase <http://www.eluniversal.com.mx/notas/709869.html>.

<sup>3</sup> Véase J. Sicilia: “Estamos hasta la madre. Carta abierta a los políticos y los criminales”, en *Proceso*, 1796, 3 de abril de 2011, págs. 8-9.

<sup>4</sup> Véase R. Aguilar y J. Castañeda: *Narco: La guerra fallida*, Punto de lectura, México D.F., 2009.

<sup>5</sup> Véase N. Flores: “Una farsa, la ‘guerra’ contra el narcotráfico”, *Contralínea*, 183, 23 de mayo de 2010, en <http://contralinea.info/archivo/2010/mayo/183/>

<sup>6</sup> Véase, por ejemplo, J. Ramos: “¿Dónde están los indignados en México?”, *El diario.mx*, 8 de junio de 2011, en <http://www.diario.com.mx/notas.php?f=2011/06/06&id=3ac2b17a2f299b0e870cf3630398a1d7>

dejando intactos, por lo demás, su entramado financiero y su capacidad para corromper todas las instancias del poder político o judicial que pretenden hacerles frente.

En consecuencia, no sólo la política de Calderón se ha mostrado inefectiva, como lo demuestra el hecho de que de las 121199 personas detenidas entre diciembre de 2006 y febrero de 2010 bajo la acusación de haber participado en algún delito vinculado con el crimen organizado sólo se haya podido comprobar fehacientemente que es el caso en 1359 de ellas –un desalentador 1,12% de eficiencia punitiva–, sino que, por el contrario, ha resultado útil, particularmente útil no a las víctimas, sino a los verdugos, porque ha fortalecido sus dinámicas de violencia y de penetración en la esfera política. En la línea trazada por los estudios de Buscaglia, Curcó revela que la estrategia puramente militar de combate al crimen organizado ha generado, por un lado, una respuesta violenta proporcional de los grupos criminales, que tienen acceso a armamento pesado y ligero muy sofisticado transportado clandestinamente desde los Estados Unidos, mientras que, por otro, al concentrar las energías en el descabezamiento de los cárteles criminales por medio de operaciones espectaculares de las que dan puntual cuenta los medios de comunicación, ha conducido a que tales grupos no únicamente se multipliquen, como las cabezas de la hidra, sino que, además, con objeto de proteger sus lucrativas actividades, redoblen sus esfuerzos por introducirse en el poder político para poder corromperlo a favor de sus intereses. En las condiciones sociales, económicas y políticas de México, por consiguiente, la estrategia exclusivamente militar de lucha contra el crimen organizado conduce a una espiral diabólica. Dice Curcó: «[...] como lo muestra la paradoja del castigo esperado, las acciones policiales y militares entorpecen la disminución de estos índices [de criminalidad organizada] al obligar a los grupos delictivos a enfrentar la amenaza provocada por la expectativa del aumento de la represión contra ellos mediante el simple redireccionar sus recursos financieros –que el Estado les ha dejado intactos– a ampliar sus redes de corrupción. Con ello aumentan los indicadores que dan origen a la criminalidad –corrupción, captura del Estado, y todo el largo etcétera ya examinado– recrudeciéndose, así, el círculo vicioso que impide utilizar la estructura del Estado para fortalecer las instituciones y combatir el crimen» (99).

Ahora bien, para comprender cómo se ha llegado a asentar esta dinámica perversa y cómo es posible que un país, otrora próspero y relativamente pacífico, se encuentre al borde del colapso social e institucional, no resulta suficiente con hacer ver que el presidente y el resto de los dirigentes políticos, así como centenares de autoridades estatales en todos los escalafones de la administración, participan en una farsa criminal de proporciones inauditas, sino que es necesario también retrotraerse, como hace Curcó, a la historia política mexicana. La torsión específica que ha adoptado el crimen, la violencia y la corrupción política en este país se debe, de un lado, a la naturaleza corporativa del Estado político mexicano –que se origina con el tipo de administración impuesto por los conquistadores españoles, la división en señoríos– y, del otro, a la caótica transición política hacia la democracia. Así pues, en primer lugar, hay que tener en cuenta que la fragmentación secular de lealtades ha acabado por cristalizar con el paso del tiempo en un Estado clientelar,

débil, susceptible de ser chantajeado con relativa facilidad por aquellos mismos grupos a los que se ve obligado a recurrir para sostenerse a lo largo y ancho de tan enorme y diverso territorio. De este modo, «el Estado pierde invariablemente presencia, se ve impedido a realizar obra pública, y más que invertir en su desarrollo generando empleos, competitividad, innovación e infraestructura, se ve empujado a financiar su subdesarrollo dilapidando sus recursos en el pago a élites y grupos corruptos» (66-67). Y, en segundo lugar, hay que admitir que la transición a la democracia no significó una transformación del auténtico régimen de poder, cuyas figuras principales persistieron y cuyo mecanismo de cooptación se mantuvo intacto, ni implicó la adopción de los estándares de transparencia y responsabilidad en el ejercicio y revisión de la labor de los cargos públicos que un sistema democrático eficaz debe hacer valer. No solamente no se logró establecer y consolidar «un efectivo sistema de rendición de cuentas con premios y castigos para los actores y las instituciones que actúan en el ámbito público» (70), sino que tampoco se consiguió que las instituciones fundamentales para mantener la seguridad pública —por ejemplo, los servicios de inteligencia, la secretaría de Hacienda, los sistemas de justicia civil y penal así como el sistema penitenciario— establecieran vínculos de coordinación, con lo cual agravan la situación de desamparo en la que viven su vida —su *nuda vida*— los ciudadanos mexicanos. La combinación de ambos factores ha coadyuvado a laminar los tímidos y precarios esfuerzos dirigidos a construir un Estado de derecho en México y, claro está, en el escenario resultante lo que sucede es que «las aplicaciones de la ley se vuelven impredecibles y los marcos discrecionales y corruptos se normalizan, los niveles de criminalidad se elevan y se vuelven sistemáticos» (86).

A diferencia de otros análisis más pesimistas, que ponen el énfasis en las características de la estructura social mexicana y tienden, de paso, a disculpar la política de Calderón, que con su estrategia militar y policial se habría limitado a “alborotar el avispero”<sup>7</sup>, el libro de Curcó, pese a su perfil inequívocamente crítico, es todavía capaz de alimentar la esperanza de que el país se reponga de este inmenso quebranto. La experiencia de lucha contra el crimen organizado en Colombia durante los últimos veinte años le resulta, en este sentido, bastante ilustrativa y provechosa. Sin embargo, más allá de la validez de sus recetas técnicas, el libro de Curcó tiene sobre todo un valor ejemplar. Después de un análisis del que se desprende una consciencia particularmente aguda de la inutilidad de tanto sufrimiento, de la espantosa injusticia que supone la muerte de tantos inocentes, del dolor instalado ya para siempre en tantos hogares y familias, en suma, la consciencia de que esta guerra está en efecto perdida, Curcó todavía insiste en que un adecuado ejercicio de racionalidad aún puede permitir a sus conciudadanos salir del funesto túnel, recobrar el orden y permitir que México —como proclamaron sus líderes revolucionarios— viva. Al escribir desde el centro del escenario que denuncia, Curcó da un ejemplo de coraje cívico incapaz de ser falsificado, una nueva muestra de que, desde Sócrates, el ejercicio de la filosofía nunca ha dejado de ser peligroso y, al tiempo, una demostración racional de amor a su patria. Al cerrar el libro, el viajero que

---

<sup>7</sup> Véase, por ejemplo, M. Naím: “¿Quién perdió a México?”, en *El País*, 17 de abril de 2011.

regresa a la tranquilidad europea puede que siga estando inquieto, pero por lo menos albergará la convicción de que en México la consciencia cívica aún no ha sido enteramente derrotada.

Lluís Pla Vargas  
(SFPUB)